

**PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA**

Arica, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS, OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Individualización del tribunal e intervinientes. Que, ante este Tribunal de Juicio Oral de Arica, compuesto por sus jueces doña **Ana Paula Sepúlveda Burgos**, quien presidió la audiencia, doña **Fabiola Andrea Collao Contreras** y don **Oscar Antonio Huenchual Pizarro**, se llevó a efecto el día diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, la audiencia de juicio oral en la causa **RIT N° 230-2021** y **RUC N°2001031235-4**, seguida en contra del acusado **LUIS EDUARDO QUINTANA HORMAZÁBAL**, chileno, cédula de identidad N° 15.675.439-0, 38 años, nacido en Cauquenes el 23 de abril de 1983, operario de planta, casado, domiciliado y apercibido conforme lo dispone el artículo 26 del Código Procesal Penal, en calle Juan Francisco González N° 3717 Block 5 depto 52 Arica, Mirador del valle, representado por la defensora penal público licitada doña **MARLEN MORALES SÁNCHEZ**, cuyo domicilio y forma de notificación consta en autos.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal adjunto don **CARLOS ELTIT ORTEGA**, domiciliado en calle Manuel Rodríguez N°363, Arica.

SEGUNDO: Acusación fiscal. Que el Ministerio Público dedujo acusación en los siguientes términos:

“El día 8 de octubre de 2020, siendo las 16:30 horas, en avenida 19 de septiembre esquina Las Gredas, Arica, personal militar y policial realizaba control sanitario a los transeúntes y automovilistas, momentos en que pasó por el lugar Luis Eduardo Quintana Hormazábal, quien al ser consultado si contaba con autorización para circular en ese momento, respondió afirmativamente y exhibió al personal militar, desde la pantalla de su teléfono celular, un permiso único colectivo que lo habilitaba para circular a esa hora y entre los días 6 y 13 de octubre de 2020. El permiso exhibido tenía un código QR que, al ser verificado, arrojó que correspondía a un permiso colectivo para la misma persona, válido entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 2020, y que había sido alterado en sus fechas verdaderas. Con fecha 18 de marzo de 2020, el

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA

Presidente de la República declaró estado constitucional de catástrofe por calamidad pública en razón de la pandemia de Coronavirus, y mediante resolución exenta 575/2020 de fecha 24 de julio de 2020 del Ministerio de Salud, se ordenó cuarentena obligatoria total en el radio urbano de la ciudad de Arica desde el 31 de julio de 2020, cuarentena prorrogada indefinidamente por resolución exenta 606/2020 del Ministerio de Salud publicada en el Diario Oficial el 28 de julio de 2020, norma destinada a evitar la propagación del Sars-Cov2 mediante la disminución de la circulación de personas y la distancia social, medida sanitaria que se encontraba vigente al momento de los hechos y era conocida de Quintana Hormazábal, quien al infringir la norma sanitaria puso en peligro la salud pública”.

Los hechos descritos son constitutivos a juicio de la Fiscalía, del delito consumado, **de uso malicioso de instrumento público falso**, previsto y sancionado en el artículo 196 en relación con los artículos 194 y 193 N° 5 del Código Penal. Y en él atribuye al acusado responsabilidad como autor, conforme al artículo 14 N° 1 y 15 N° 1 del Código Penal.

A juicio del Ministerio Público, no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, por lo que solicitó la pena **de tres años de presidio menor en su grado medio** por el delito de uso malicioso de instrumento público, con accesorias de suspensión de cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena; finalmente, el pago de las costas.

TERCERO: Alegatos de apertura. Que, en su **alegato de apertura**, el **Ministerio Público** señaló, el juicio que trae la fiscalía en el día de hoy se refiere a las denominadas falsificaciones de los salvoconductos o permisos de circulación que se otorgaron cuando nos encontrábamos en toque de queda o con restricciones de desplazamiento por la situación de pandemia COVID-19, que se encuentra vigente, en ese escenario lo que la policía como se planteó en los hechos de la acusación, primero personal de ejército efectuó una fiscalización y se logra percatar que el permiso que mantenía el acusado en su teléfono celular era un permiso falso, tenía problemas en la fecha, existían alteraciones, la operatoria para obtener o verificar aquello es mediante la lectura

de un código QR que se hace por vía de una aplicación, básicamente cualquier persona tiene en sus teléfonos celulares, al hacer tal verificación, se determinó de que permiso era falsificado, y que según el código QR, tenía una fecha distinta, entonces desde un punto de vista probatorio, el ente persecutor se compromete a determinar la existencia de este permiso falso, la falsedad del mismo, las circunstancias de encontrarse la existencia de limitación de la restricción, lo que indicará la prueba documental, testimonial y material. Desde un punto de vista fáctico no es un tema complejo acreditar que se pudiera probarse, de no mediar una circunstancia extraña, pero de no mediar aquello, no debería ser mayor tema lo probatorio respecto al desarrollo fáctico de los hechos, lo que, si va a ser la discusión desde un punto de vista jurídico, en especial el sentido y alcance de la Ley N° 19799, en el sentido de exigir dicha norma para la validez de un documento o de un instrumento público, la existencia de una firma electrónica avanzada, esto ha sido discutido por las defensas en forma bastante reiterativa en garantía, hubo un juicio oral respecto de esta materia, sentencia definitiva condenatoria de mayoría, pero que en este momento se encuentra con resolución pendiente por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, interpuesto por la defensa, lo que se va a discutir es que si efectivamente el documento tiene el carácter de instrumento público o no, se va a argumentar que es un documento oficial emitido por la autoridad, pero que no ha perdido la calidad de público. Pide veredicto de condena.

La defensa, señaló **en su apertura**, efectivamente la teoría del caso es básicamente, que tratándose de un documento electrónico es que basado en la Ley N° 19799, requiere una firma electrónica avanzada, por lo que los permisos individuales de desplazamiento no cumplen con los requisitos legales para ser considerados como instrumento público, siendo un hecho atípico, tomando en consideración los artículos 4 y 7 de tal norma, que refiere que los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumentos públicos deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada, también las alegaciones la dejarán para los alegatos finales. En cuanto a los hechos fácticos, el imputado reconoce

modificado la firma, si bien va a renunciar a su derecho a guardar silencio, les va a señalar la situación que lleva a modificar tal permiso, por lo demás que le permitía desplazarse el cual era solicitado por el empleador, trabaja en la empresa AGROSUPER, su domicilio se ubica en un lugar que todos los días existía un control sanitario, en ese sentido tenía los permisos correspondientes, se ve afligido, porque ese día no le llega el permiso colectivo a la hora indicada y debía pasar por este control sanitario; producto de la pandemia, temió perder el trabajo por no contar con el permiso colectivo, es una persona que trabaja, que tiene hijos, bajo ese antecedente decide cambiar la fecha de su permiso colectivo que si lo tenía, que lo acompaña el día de hoy, el empleador se lo envía, pero no le llega porque cambió su teléfono celular, pudiendo constatar que el permiso existía Pide absolució que se trata de un hecho atípico y que su representado va a declarar.

CUARTO: Declaración del acusado. Que legalmente enterado de sus derechos y de los hechos transcritos en la acusación, el imputado decidió declarar, indicando que, él trabaja en Ariztía, a cumplir dos años en Arica, encontró trabajo como contratista, prestando servicios en una empresa contratista en planta, el trabajo que empezó a desempeñar, fue adquiriendo reputación, el cual le daba cierta responsabilidad en base lo que estaba haciendo, como contratista para planta, vive en la villa que vive queda frente al AGRO solamente está la carretera, la entrada y salida de Arica, para entrar pasa por un cordón sanitario, y para salir vuelve a pasar por un cordón sanitario, tuvo problemas con su teléfono, no tuvo como solicitar nuevamente el permiso por temas de tiempo, asume que cometió un error, el documento fue original, simplemente se adulteró la fecha, con desfase, en que se le venció el documento ayer y él hoy, no tenía como transitar, cometió el error de cambiar la fecha, al llegar a su trabajo solicitó el documento nuevamente para que se los enviaran, ellos se lo enviaron, él ya al otro día, tuvo el documento original en su poder, siempre lo tuvo pero el cambio de teléfono, los datos no se le guardaron, no hizo una copia, no tenía como poder bajar de donde vive al trabajo; reconoce su error que cometió pero está la responsabilidad que conlleva, está hace dos años

**PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA**

en Arica, su hija está en su segundo año de universidad, tiene tres hijos menores, su señora trabaja, pero paga arriendo, lo que surge una presión, por lo que cometió el error que saben.

Ante las preguntas del **fiscal**, expresó que, había una adulteración de una fecha, cuando hizo cambio del teléfono, la acorta, la agranda y cambió la fecha, como el documento fue enviado a su nombre, solo cambió el desfase de fecha para pasar el control, se le vencía el 29, no recuerda la fecha, fue como un lapso del 29, e hizo el cambio de día.

Exhibe prueba documental contenida en el acápite II) número 1) y 2):

Número 2: Reconoce el documento por el cual intervino, la fecha de limitaciones de movimiento fue el 06 y el 13, la fecha de emisión no se distingue mucho.

Número 1: Consta su nombre, aparece como limitación, el 29 de septiembre y el 6 de octubre, la fecha de emisión fue el 29 de septiembre, ese es el documento original que adulteró.

Su teléfono celular era un Samsung A01, le parece con la pantalla quebrada, **exhibe evidencia material contenida en el acápite III) número 1):** Es el teléfono que él exhibió ese día, es el que mostró al personal militar. Él exhibió el documento, personal militar escaneó el código QR y se dieron cuenta que estaba adulterado, luego personal militar se acercó el encargado de la cuadrilla o del grupo, le dijo que iba a quedar detenido, llamaron a personal PDI, tomó su declaración, les consultaron lo que había pasado, les comentó lo mismo, que adulteró un documento, no tenía el original en ese momento, pero debía llegar a su trabajo, fue enviado al cuartel estuvo toda la noche ahí y luego pasó al tribunal.

La **defensa**, no formuló preguntas.

QUINTO: Convenciones probatorias, querella criminal y demanda civil. Que, no se presentó querella criminal ni demanda civil. Los intervinientes tampoco acordaron convenciones probatorias.

SEXTO: Prueba del Ministerio Público. Que, con el objeto de acreditar los hechos materia de la acusación, el Ministerio Público rindió la siguiente prueba, que consta íntegramente en el registro de audio:

I.- Testimonial:

1.- FELIPE FABIÁN JAIME MATUS, chileno, cédula de identidad N° 17.311.644-6, 31 años, nacido el 4 de noviembre de 1989, soltero, teniente del Ejército de Chile, domiciliado en El Buitre sin número, Regimiento Coraceros, Arica, quien legalmente juramentado y ante las preguntas **del fiscal** expresó que, le mandaron un documento por falsificación de instrumento público, leyó la declaración que le enviaron y que hizo, no recuerda exactamente cuando fue, ya que fueron 1.000.000 de fiscalizaciones, leyó la declaración en cuanto a la fecha, nombre y dirección, diariamente se fiscalizaba 6000 personas la cual eran varios los casos de falsificación, no andar con su permiso, no recuerda el acto en sí, hizo la declaración, fueron el año pasado más 1.000.000 de fiscalizaciones realizadas. El documento salía que declaraba que tal persona había hecho una falsificación del permiso de la comisaría virtual y le había cambiado unas fechas.

Respecto a las preguntas de **la defensa**, manifestó que, no recuerda específicamente el procedimiento por el cual está citado, hizo la declaración, cual es la persona, si no le hubiesen mandado el documento no lo recuerda, eran más de 6000 personas controladas diariamente, su trabajo era fiscalizar a las personas, viendo su permiso individual, uno de través del año completo que llevaron fiscalizando, ya sabían quien tenía adulterado el permiso y quien no, era portado por un instrumento electrónico que se obtiene de la página de la comisaría virtual.

2.- ÁLVARO SAMUEL SEPÚLVEDA NEIRA, chileno, cédula de identidad N° 17.343.582-7, 31 años, nacido el 19 de agosto de 1989, casado, subcomisario de la PDI, domiciliado en calle Belén N° 1651, quien legalmente juramentado y ante las preguntas **del fiscal** expresó que, el año 2020 con fecha 8 de octubre se encontraba en servicio cuarentena, en horas de la tarde, los llaman desde el punto de control militar que estaba apostado en calle Las

Gredas con 19 de septiembre a un costado del supermercado UNIMARC, se dirigen al lugar, toman contacto con el personal de ejército con un teniente que no recuerda el nombre, quien manifestó que minutos antes habían fiscalizado a una persona Luis Quintana Hormazábal, le había exhibido el permiso colectivo a través de un teléfono celular, el personal militar al verificar con el código QR, encontró que no correspondían las fechas de este permiso, verificando en el lugar, que Luis Quintana de manera y voluntaria, como espontánea les indicó que modificó la fecha del permiso de movilidad de la comisaría virtual, ellos corroboraron que eso era cierto, le dieron cuenta a la fiscal de turno, instruyendo dentro de las diligencias tomarle declaración a personal militar, corroborar información del teléfono y poner a disposición del imputado para su control de detención.

La fiscal instruyó remitir la captura de pantalla del dispositivo del imputado que había sido modificado, en contraparte remitir el certificado original, se hizo la comparación del sistema QR de la comisaría virtual y se expusieron en un cuadro gráfico los dos permisos de movilidad, las fechas no correspondían de acuerdo la página que vinculaba el código QR, no correspondía con el que había exhibido, no recuerda la fecha.

Exhibe prueba documental contenida en el acápite II) número 1) y 2):

Número 1: El nombre que aparece es Luis Quintana Hormazábal, a quien habían sorprendido personal de ejército, las fechas que establece el documento dentro de las limitaciones, dice otorgado por, fecha de emisión 29 de septiembre de 2020, válido por 7 días desde la fecha de la emisión del permiso, la modalidad es diurno entre las 05:00 horas y 22:59 horas, la fecha desde el 29 de septiembre y hasta el 6 de octubre.

Número 2: Respecto del nombre es la misma persona, dentro de las limitaciones, la fecha que rige las limitaciones es a contar el 6 de octubre hasta el 13 de octubre, la fecha de emisión el 5 de octubre.

Esto fue lo enviado a la fiscalía y revisado por el personal de ejército, el segundo fue adulterado.

Respecto a las preguntas de **la defensa**, manifestó que, el documento se encontraba en el celular de su defendido, se trata de un documento que se encontraba en su teléfono celular, se da un pantallazo al original y al falsificado, este documento se emite a través de la comisaría virtual, es instrumento electrónico.

3.- RODRIGO ALEJANDRO MOSCOSO ROJAS, chileno, cédula de identidad N° 15.980.128-4, 35 años, nacido el 26 de marzo de 1985 en Arica, soltero, subcomisario de la PDI, domiciliado en calle Belén N° 1651, quien legalmente juramentado y ante las preguntas **del fiscal** expresó que, fue citado a este juicio, mientras se encontraba de servicio, el día 8 de octubre de 2020, el enlace de ellos, de la PDI, les llaman para concurrir para un *check point*, del ejército que estaba en calle 19 de septiembre y Las Gredas que estaba entre las dos rotondas, de Azapa y la salida de Arica, y les señala que al parecer tenían una persona detenida por una falsificación de instrumento público, cuando concurren al lugar, personal militar tenía a una persona detenida, ellos lograron corroborar en el lugar que el permiso que tenía estaba adulterado, situación que verifican mediante el QR que tiene el permiso, percatándose que no correspondían las fechas, habían sido adulteradas las fechas del permiso, se trasladó al cuartel Belén para realizar las diligencias correspondientes por el artículo 318 del Código Penal y la falsificación del documento. Se dieron cuenta de la alteración o adulteración del documento porque realizaron el scanner al código QR que mantiene el permiso y al scanearlo, le arrojó las fechas originales del permiso que no correspondían a las fechas del permiso que había exhibido al acusado al personal militar.

Respecto a las preguntas de **la defensa**, manifestó que, este documento exhibido al funcionario militar era a través de su teléfono celular, se trataba de permisos colectivos que emitía comisaría virtual, es un documento electrónico.

II.-Documental:

1.- Permiso único colectivo original folio 14324363, con fecha de vigencia entre el 29 de septiembre de 2020, código de verificación WPK9GJ7SJMU2, emitido por Comisaría virtual.

2.- Permiso único colectivo emitido por Comisaría virtual falsificado, con supuesta fecha de emisión 5 de octubre de 2020, con supuesta validez entre el 6 de octubre y el 13 de octubre de 2020.

III.-Evidencia material y otros medios de prueba:

1.- Una fotografía de pantalla de celular.

SÉPTIMO: Prueba de la defensa: Que, la defensa no se adhirió a la prueba rendida por el ente persecutor y rindió la siguiente prueba propia:

I.-Prueba documental:

1.- Permiso único colectivo original folio 15758226, con fecha de vigencia entre el 6 de octubre de 2020 y el 13 de octubre de 2020 código de verificación W67074VCNU7M, emitido por Comisaría virtual.

OCTAVO: Alegatos de clausura y réplicas. Que la fiscalía, en su **alegato de clausura**, señaló que, desde un punto de vista probatorio, las circunstancias fácticas no hay mayor duda de cómo se dieron los hechos, respecto de la fiscalización, respecto de la falsedad del documento, los testigos de la fiscalía, el personal de ejército no dio cuenta de mucho, pero mencionó la existencia del procedimiento, como dio cuenta del tipo de fiscalización realizada, en cambio personal PDI explicó las operatorias respecto del documento respecto del análisis del código QR que tenía el documento y que mediante la exhibición del mismo, piensa que razonablemente de que existe una falsedad en la fecha del documento, tampoco no hay mayor duda que el documento es emitido por personal de Carabineros que mantenía la firma al final del mismo y es de público conocimiento la existencia de este tipo del documento, la fuente y la forma de obtención; la prueba de la fiscalía ha sido contundente para verificar la falsedad del documento como la conducta de exhibición del mismo, que es básicamente de la utilización, aparte del reconocimiento efectuado por el acusado. El punto para discutir es la aplicación del artículo 4 de la Ley N° 19799, que establece los requisitos de la firma electrónica de los documentos para cómo darles el valor probatorio en el marco de esta ley: la defensa se hará eco de un fallo de la Ilustrísima Corte de Valparaíso del 5 de mayo de 2021, el cual efectúa una interpretación restrictiva de la norma, respecto a que se

**PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA**

requiere para todo documento de toda naturaleza, emitido por cualquier persona pero para darle el carácter de instrumento público debe tener firma electrónica avanzada, que requiere un nivel de certificaciones posteriores para tener tal validez.

Refiere que es una concepción limitada de la norma, porque se lee de una perspectiva general, dándose una extensión del mundo civil y administrativo al mundo penal, no parece coherente que un documento como este o un permiso que puede ser obtenido perfectamente en una comisaría de forma presencial y podría obtener en papel un permiso de Carabineros en etapa de restricción de movimiento; entonces si un funcionario de Carabineros lo emite en forma virtual, el documento no es instrumento público y si un Carabinero lo emite en forma presencial con las mismas formalidades, si tendría el carácter de público, para efectos de certeza probatoria, algo no cuadra, ya que se debe distinguir el concepto de instrumento público en materia civil y administrativa, como dentro de la protección penal de instrumento y que hay ciertos instrumentos públicos protegidos en materia penal que no necesariamente o tienen un nivel de especificidad determinada o lo que denomina la doctrina un documento oficial; una cosa es que el legislador quiera dar por la vía de la protección para efectos de la certeza para quienes otorgan un documento que tenga una firma electrónica avanzada que parece del todo razonable para efectos de la protección de la legitimidad del documento a hacer el mismo ejercicio con aquel otorgado por una autoridad o funcionario público, tendríamos que dejar sin protección penal a los documentos oficiales emitidos por las autoridades por el hecho de un requisito formal que se da para efectos de otros tipos de documentos que son instrumentos públicos entre particulares que no tienen estas necesidades de certeza, más no de los funcionarios públicos en el uso de sus funciones que emiten el documento, decretos e instrucciones, los funcionarios públicos deberían sacar una firma electrónica avanzada, lo cual no es así porque se hablaría de distintos documentos, por lo que la protección penal que se da en el artículo 4, puesto que se está en un ámbito distinto, que es un documento emitido por una autoridad en que la protección penal es

**PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA**

resguardar la fe pública, pero lo hace mediante el ejercicio o emisión del propio funcionario, si no fuera así, se daría la paradoja entre un documento electrónico y una presencial, la forma de entender que ambos tienen el mismo valor, ya que la protección que otorga el artículo 4 de la Ley N° 19799 es para dar fe de un tipo de documentos oficiales emitidos por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Pide veredicto de condena.

La **defensa**, indicó que como se adelantó en la apertura, insta por la absolución de su defendido, existe un tema pacífico en que se está acá el día de hoy, en estos hechos, dice relación con un documento electrónico, así lo han reconocido todos los funcionarios policiales que declararon el día de hoy, inclusive el funcionario militar que tenía la función de controlar a 6000 personas diariamente; tampoco dentro de las alegaciones del fiscal no existe cuestionamientos en relación a que era un documento, es un permiso colectivo emitido por la comisaría virtual, el hecho que menciona el fiscal en cuanto a que habría una diferencia entre la persona que va a la comisaría y saca un papel, como aquel que realiza el trámite en cuestión, en realidad cuando las personas realizaban este trámite en la comisaría virtual, eran funcionarios policiales que estaban con un computador y facilitaban realizar el trámite, pero es el mismo permiso virtual sacado de la misma página, se trata también de un documento electrónico.

Pide la absolución de su defendido porque el hecho es atípico, ello por una razón estrictamente jurídica, debido a que los permisos individuales de desplazamientos no cumplen con los requisitos legales para ser considerados como instrumentos públicos, los permisos individuales de desplazamientos emitidos por comisaría virtual, son documentos electrónicos, ese punto es pacífico, en tal calidad le son aplicables la Ley N° 19799, que trata sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicio de certificación de la misma firma, no hay posibilidad de hacer una distinción de ciertos documentos que tienen la obligación de poseer una firma avanzada y otros no, la ley no hace distinciones, cita el artículo 4 de la misma ley, en cuanto a la exigencia de que los instrumentos públicos deberán suscribirse con firma electrónica avanzada,

además cita el artículo 7 en cuanto a la suscripción de firma electrónica avanzada; por su parte la firma electrónica está definido en el artículo 15 letra c) de la misma ley, el cual debe cumplir una serie de requisitos que simplemente los permisos de desplazamientos no contienen; claramente lo que contiene el permiso colectivo es una firma electrónica más no avanzada al acreditarse que en este permisos existen dos hechos pacíficos, se trata de un documento electrónico y este documento electrónico no tiene no tiene una firma electrónica avanzada, entiende que el hecho es atípico, lo único que lleva a razonar que procede la absolución de su defendido. Cita fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa rol 917-2021, que razona de la misma manera, no puede considerarse un instrumento público, pide absolución de su defendido.

Finalmente, concedida la palabra al acusado, fue lo que ocurrió, le gustaría que se tomara la mejor decisión enfocada en su bienestar.

NOVENO: Elementos normativos del tipo penal y bien jurídico protegido. Que el artículo 194 del Código Penal prescribe que “El particular que cometiere en documento público o auténtico alguna de las falsedades designadas en el artículo anterior, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”; el cual relacionado con el artículo 193 N° 5 del mismo cuerpo legal reseña “(...) el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad: 5° Alterando las fechas verdaderas”.

Por último, el artículo 196 del Código Sancionatorio expresa que “El que maliciosamente hiciere uso del instrumento o parte falso, será castigado como si fuere autor de la falsedad”.

En tal aspecto se debe considerar que instrumento público o documento es todo objeto que materializa un pensamiento, una cosa corporal en la que está fijada la exteriorización de una idea. En el caso del N° 5 del artículo 195 del Código Penal, estamos frente a una falsificación ideológica, esto es, la alteración del contenido o de los efectos del instrumento, hechas eso si mediante una falta de a la obligación de decir la verdad acerca de los hechos que presencia, que recae en el funcionario público responsable de autorizar u otorgar el

instrumento que se trate. Cabe asimismo destacar que el tipo penal en comento requiere para su comisión dolo directo; tratándose del artículo 196 del Código Penal el uso malicioso de instrumento público o parte telegráfico falsificado, se trata de una regla que castiga el agotamiento del delito principal, para quien representa un típico acto posterior copenado, debiendo probarse la falsedad igual que en el caso del artículo 193 pues no se trata de un delito distinto, sino de una regla que permite castigar el uso de instrumento falso por terceros ajenos a la falsificación original¹.

Por otro lado, la Ley N° 19799, sobre “Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificado de dicha firma”, ley atinente al caso, prescribe en el artículo 1 que, “La presente ley regula los documentos electrónicos y sus efectos legales, la utilización en ellos de firma electrónica, la prestación de servicios de certificación de estas firmas y el procedimiento de acreditación al que podrán sujetarse los prestadores de dicho servicio de certificación, con el objeto de garantizar la seguridad en su uso”.

Asimismo, el artículo 2 de la norma en comento se refiere a documento electrónico que lo define, como electrónico: característica de la tecnología que tiene capacidades eléctricas, digitales, magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares; por su parte la firma electrónica corresponde a “cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor y firma electrónica avanzada “aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría”.

¹ MATUS ACUÑA, Jean Pierre; RAMÍREZ GONZÁLEZ, “Lecciones de Derecho Penal Chileno”, Parte Especial, Tomo II, págs. 397 y sgtes.

Por su parte el artículo 4 prescribe que “los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada”.

Por último, el artículo 7 refiere que “los actos, contratos y documentos de los órganos del Estado, suscritos mediante firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los expedidos por escrito y en soporte de papel.

Con todo, para que tengan la calidad de instrumento público o surtan los efectos propios de éste, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada”.

En cuanto al bien jurídico protegido, **el objetivo es la fiabilidad, la seguridad del tráfico jurídico, en particular el valor probatorio de los documentos, como el atentado a la Fe Pública.**

En cuanto a los elementos del tipo son los siguientes: a) que un particular use un instrumento público o auténtico, en el caso particular electrónico con firma electrónica avanzada; b) que en dicho instrumento público la fecha verdadera de emisión se encuentre alterada y c) debe ejecutarlo en forma *maliciosa*, esto es, con dolo directo.

DÉCIMO: Análisis y valoración de la prueba del Ministerio Público.

Que, en el presente juicio, si bien no hubo discusión fáctica, puesto que tanto el ente persecutor y la defensa son contestes en señalar que efectivamente el acusado utilizó un documento electrónico consistente en un permiso único colectivo, y que alteró la fecha de vigencia, lo que daría por verificado la dinámica fáctica, la discusión es más bien jurídica como se verá; sin perjuicio de aquello, es necesario para una mejor inteligencia del presente fallo y por los requisitos establecidos conforme al artículo 297, 340 y 342 del Código Procesal Penal para el análisis de esta.

Es así como, primeramente, se contó con los asertos del funcionario militar **Jaime Matus**, el cual en realidad no otorgó ningún dato relevante o atinente a la presente causa, habida cuenta que su relato fue genérico, no teniendo conocimiento del proceso específico por el cual fue citado a juicio, solo

manifestando que se trataba de una falsificación de un permiso en comisaría virtual, pero que no recuerda más datos debido a la cantidad de controles que se hicieron en dicha época, en especial cuando la ciudad de Arica se encontraba en cuarentena, por lo que en nada puede utilizarse estos asertos para generar algún elemento o indicio suficiente para dar por verificado la concurrencia de algún elemento típico, razón por la que se descartará tal declaración.

Además, declaró en estrado el funcionario de la PDI **Sepúlveda Neira**, el que se estimó creíble y verosímil por estos sentenciadores, al ser un testigo que participó directamente en los hechos objeto del ilícito que versa este juicio, dando razón de sus dichos, como se ubica espacio-temporalmente en el sitio del suceso como en la fecha de acaecimiento de estos, explicando el procedimiento adoptado, siendo claro, objetivo y enfático, en qué consistía éste, como igualmente lo que pudo percibir directamente con sus sentidos, no demostrando ninguna inquina en contra del encartado, solo cumpliendo una labor policial, relatando que por vía de un llamado de personal de ejército que se encontraba el día 8 de octubre de 2020, en un punto de control en calle Las Gredas con 19 de septiembre, fiscalizan al encartado el cual les exhibe el permiso colectivo desde su celular verificando que el código QR no correspondía a las fechas de tal permiso circunstancia igualmente reconocida por el imputado, en cuanto a la modificación de las fechas del permiso, circunstancia igualmente corroborada por el funcionario policial en comento mediante la exhibición de la prueba documental contenida **en el acápite II) número 1) y 2)**, donde el funcionario policial pudo determinar que, el documento emitido pertenecía al imputado, cuya fecha de emisión es el 29 de septiembre de 2020, válido por 7 días, por lo que regía hasta el 6 de octubre, el cual cotejado con el segundo documento falso la fecha de emisión es el 5 de octubre y vigente por los días 6 al 13 de octubre de 2020, aclarando en todo caso que se trata de un documento electrónico emanado por comisaría virtual.

Por otro lado, declaró el testigo **Moscoso Rojas**, funcionario de la PDI quien en síntesis explicó la misma secuencia fáctica del deponente anterior en que el día y lugar de los hechos personal militar mantenía una persona detenida

debido a que el permiso único colectivo estaba adulterado ya que el código QR se encontraba alterado en cuanto a las fechas del permiso que había exhibido el acusado por vía de su teléfono celular al personal militar, detallando que se trata de un documento electrónico expedido por la comisaría virtual.

Además, se contó con las pruebas documentales contenidas en el **acápito II) número 1) y 2)**, las que demostraron lo referido por el acusado en cuanto a que cuya fecha de emisión es el 29 de septiembre de 2020, válido por 7 días, por lo que regía hasta el 6 de octubre, el cual cotejado con el segundo documento falso la fecha de emisión es el 5 de octubre y vigente por los días 6 al 13 de octubre de 2020, como igualmente el otro medio de prueba presentado por el ente persecutor consistente en el **acápito III) número 1)**, que correspondía a una foto del celular del acusado que aparecía justamente el permiso exhibido el cual fue adulterado por el encartado, explicando que la imagen del permiso la acorta, la agranda y cambió la fecha, como el documento fue enviado a su nombre, solo cambió el desfase de fecha para pasar el control, se le vencía el 29, no recuerda la fecha, fue como un lapso del 29, e hizo el cambio de día. Es así que la presente declaración tampoco fue cuestionada por ninguno de los intervinientes siendo plenamente plausible y complementario con los asertos de los funcionarios policiales que en lo factico dan por verificado que precisamente el encausado hizo un uso malicioso de un documento electrónico adulterando las fechas de vigencia de éste lo que fue detectado por personal militar.

Se debe considerar que la discusión en la presente sentencia versa más bien en el punto jurídico, lo que ya fue resuelto por estos sentenciadores al emitir el veredicto en la presente causa, estimando que, por la naturaleza del documento electrónico emitido por comisaría virtual, no reviste la calidad de instrumento o documento público, al no contener una firma electrónica avanzada que como se dirá es exigida por la Ley N° 19.799, el cual por principio de especialidad se ha de regir este tipo de documentación, la que precisamente regula “documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma”, entendiendo este tribunal al igual que la defensa que en virtud de los hechos acusados por el ente persecutor, a saber, el uso malicioso de

instrumento público sería **atípico**, ello debido a que precisamente el documento electrónico emitido por la comisaría virtual no reviste las exigencias que la propia norma indicada establece.

En tal punto, si se remite a las normas del artículo 2 letra d), f), artículo 3, artículo 4, como las normas de los artículos 6 y 9 del mismo cuerpo legal, “para que dichos documentos tengan el carácter de instrumentos públicos, en comparecencia personal de las partes no es solemnidad legal ‘deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada y constar en ellos su fecha, mediante el sellado de tiempo correspondiente’”².

Al respecto, no existe controversia entre las partes del juicio, que el presente documento es electrónico, más no cumple con los requisitos para revestir esa calidad especial que le imputa el ente persecutor que implicaría ser un instrumento público o auténtico, porque por norma expresa del artículo 4 “Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada” y el artículo 7 de la norma de marras señala que “Los actos, contratos y documentos de los órganos del Estado, suscritos mediante firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los expedidos por escrito y en soporte de papel”.

Por lo que, al existir con todo, para que tengan la calidad de instrumento público o surtan los efectos propios de éste, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada”. Por lo tanto, al verificarse que existe una interpretación literal de normas que rigen en el caso concreto, a saber, documentos electrónicos que para mantener un carácter de instrumento público requieren firma electrónica, no se vislumbra la antinomia y analogía que pretende realizar el ente persecutor por los certificados expedidos por personal policial personalmente, porque ellos tampoco mantendrían el carácter de instrumentos públicos, al no constar de una firma electrónica avanzada o en el caso de un contrato de compraventa, en especial de un bien raíz es una formalidad que

² MATUS ACUÑA, Jean Pierre; RAMÍREZ GONZÁLEZ, “*Lecciones de Derecho Penal Chileno*”, Parte Especial, Tomo II, pág. 401.

**PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA**

establece la propia legislación civil que deban constar por escritura pública otorgada ante funcionario competente, por lo que al tratarse de circunstancias y aplicación de normas de diversa índole no pueden ser comparables, máxime si la propia Ley N° 19799, resuelve las características que debe tener un documento electrónico para considerarse como instrumento público como se ha indicado en las normas en comento, e inclusive el artículo 9 de la ley en análisis establece la forma de certificación de las firmas electrónicas avanzadas "La certificación de las firmas electrónicas avanzadas de las autoridades o funcionarios de los órganos del Estado se realizará por los respectivos ministros de fe. Si éste no se encontrare establecido en la ley, el reglamento a que se refiere el artículo 10 indicará la forma en que se designará un funcionario para estos efectos. Dicha certificación deberá contener, además de las menciones que corresponda, la fecha y hora de la emisión del documento. Los efectos probatorios de la certificación practicada por el ministro de fe competente serán equivalentes a los de la certificación realizada por un prestador acreditado de servicios de certificación (...)", lo que relacionado con el artículo 15 de la misma norma, reafirma que el documento emitido por comisaría virtual, a pesar de ser electrónico, carece de las características de ser un instrumento público, por lo que se considera que el ilícito imputado es atípico.

Por último, la sentencia rol 917-2021 de 5 de mayo de 2021 emitida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, reafirma este orden de ideas que se han ido desarrollado en el sentido que " 2° Que el documento de que se trata es de naturaleza digital o virtual, y eso no está en duda y fue así reconocido ante estrado por el representante del Ministerio Público. Siendo así, ese documento no puede ser considerado instrumento público si no cuenta con firma electrónica avanzada, por expresa disposición del artículo 7° de la Ley 19.799. norma que en modo alguno se puede soslayar. La distinción que ante estrados ha planteado el representante de la Fiscalía, entre documentos virtuales y electrónicos carece de todo sustento. Los documentos son, o bien materiales, o bien virtuales, y los virtuales son obviamente electrónicos. La ley no hace esa distinción y no se advierte cuál pueda ser su base.

3° Que en consecuencia, el documento de que aquí se trata no es público, pues es pacífico que carecía de firma electrónica avanzada, y por ende, como no se ha imputado siquiera de manera potencial la producción de un perjuicio patrimonial en contra de nadie, es de toda evidencia que el hecho por el cual se ha formalizado a la imputada es atípico respecto de las figuras de los artículos 193, 194 y 196 del Código Penal, por lo que debe decretarse de inmediato el sobreseimiento definitivo y parcial, que la defensa ha reclamado”.

Desde el punto de vista de la convicción, lo cierto es que el estándar de “más allá de toda duda razonable” en este proceso penal, debe tratarse de uno objetivo, racional, posible de controlar, teniendo presente que el proceso penal pretende la averiguación de la verdad, aquella verdad por correspondencia de Tarski³, la que debe ser descubierta a través de un método lógico inductivo, que permita establecer que la teoría acusatoria, tenga suficiente apoyo en premisas posibles de medir racionalmente. La labor de un juez no se aleja de la de un científico que pretende descubrir, a través de procesos o experimentos, la verdad de la hipótesis acusatoria. En ello el tribunal debe tener siempre presente que se debe contar con tantos elementos como los disponibles, que permitan sostener una conclusión, a saber, cumplir con la regla de la lógica de razón suficiente, que permite afirmar un hecho sólo cuando hay suficientes razones para sostenerlo, principio además que en un modelo racional de valoración, constituye una herramienta que controla la convicción del juzgador de forma objetiva, eliminando con ello cualquier subjetividad de éste, lo que desde luego, debe ser desterrado en pos de un proceso penal respetuoso de las garantías de los ciudadanos.

Valga decir que en la sede y materia sobre la que razonamos, se trata de lograr que el juez penal pueda condenar al imputado solamente cuando haya alcanzado (al menos en tendencia) la “certeza” de su culpabilidad; mientras que el imputado deberá quedar absuelto todas las veces en las que existan dudas razonables, a pesar de las pruebas en su contra, de que sea inocente. Entonces,

el estándar de prueba es particularmente elevado, cuyo fin es limitar las condenas penales únicamente a los casos en los que el juez haya establecido con certeza o casi-certeza (o sea sin que exista, con base en las pruebas, ninguna probabilidad razonable de duda) que el imputado es culpable.⁴

A mayor abundamiento, el principio de inocencia que informa nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrado en el artículo 4° del Código Procesal Penal, principio que trae como consecuencia que la carga de la prueba en el juicio penal corresponde al Estado. Si éste no logra satisfacer el estándar probatorio establecido por la ley, el tribunal no puede sino arribar a una decisión absolutoria. En consecuencia, la presunción de inocencia sólo podrá desvirtuarse mediante una actividad probatoria suficiente y razonable de cargo, lo que no ha ocurrido en la especie respecto del acusado en comento. Por lo tanto, en esta ocasión, el Tribunal ha estimado que deberá absolver a la acusada de la presente imputación formulada en su contra, porque el hecho imputado en su contra es atípico.

UNDÉCIMO: Hechos acreditados. Que conforme a los antecedentes reseñados y ponderados precedentemente, este Tribunal, apreciando de manera libre la prueba descrita, rendida durante el desarrollo de la audiencia en los términos previstos en el artículo 297 del Código Procesal Penal, por no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia ni los conocimientos científicamente afianzados, de conformidad con el principio de inmediación, estimó acreditados, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:

“El día 8 de octubre de 2020, en horas de la tarde en avenida 19 de septiembre esquina Las Gredas, Arica, personal militar y policial realizaba control sanitario a los transeúntes y automovilistas, momentos en que pasó por el lugar Luis Eduardo Quintana Hormazábal, quien al ser consultado si contaba con autorización para circular en ese momento, respondió afirmativamente y exhibió al personal militar, desde la pantalla de su teléfono celular, un permiso

³ TARUFFO, Michelle, *La prueba de los Hechos*; Editorial Trotta, 4ª edición; 2.011, pág.29.

⁴ TARUFFO, Michele; *La Prueba: artículos y conferencias*, Editorial Metropolitana, Chile, 2009, pág. 112 ss.

único colectivo que es un documento electrónico el cual no constaba firma electrónica avanzada que lo habilitaba para circular a esa hora y entre los días 6 y 13 de octubre de 2020. El permiso exhibido tenía un código QR que, al ser verificado, arrojó que correspondía a un documento electrónico para la misma persona, válido entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre de 2020, y que había sido alterado en sus fechas verdaderas”.

DUODÉCIMO: Absolución del acusado. Que, en consecuencia, dado que si bien se pudo corroborar las circunstancias fácticas del hecho, este sería atípico conforme a lo ya expuesto latamente en el considerando décimo de la presente sentencia, no puede menos que concluirse que no se acreditó más allá de toda duda razonable, el delito materia de acusación.

Además, no está de más recordar aquí, que en el actual procedimiento penal no se trata de analizar si la versión aportada por el acusado es la que se ajusta mejor a la verdad, sino que, dada la presencia del principio de inocencia, lo que esencialmente toca al órgano persecutor es contradecir dicho principio con la prueba de cargo que legalmente aporte, moviendo entonces a una convicción condenatoria más allá de toda duda razonable.

Luego, aun cuando eventualmente no resulte probada la versión de un acusado o la hipótesis del caso que plantee la defensa, si dicha duda razonable no se ha disipado con esa prueba de cargo, significa entonces que se mantiene incólume la presunción de inocencia y de todas maneras procesalmente debe llegarse a una decisión de absolución.

A su turno, sobre la base del artículo 340 del Código Procesal Penal, la convicción del tribunal debe generarse **únicamente con la actividad probatoria de los intervinientes durante el juicio oral**. En este caso, la acusación planteada por el ente persecutor versa sobre un hecho atípico, por lo que no se puede emitir un veredicto condenatorio respecto del acusado, teniendo en consideración la presunción de inocencia que la ampara, de conformidad con el artículo 4° del Código Procesal Penal, por lo que la decisión debe ser, tal como se adelantó en el veredicto, necesariamente **absolutoria** respecto de él.

**PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA**

A mayor abundamiento, el principio de inocencia que informa nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrado en el artículo 4° del Código Procesal Penal, principio que trae como consecuencia que la carga de la prueba en el juicio penal corresponde al Estado. Si éste no logra satisfacer el estándar probatorio establecido por la ley, el tribunal no puede sino arribar a una decisión absolutoria. Por lo tanto, en esta ocasión, el Tribunal ha estimado que deberá absolver al encartado de la imputación formulada en su contra.

DÉCIMO TERCERO: Costas. Que, pese a que la sentencia será absolutoria, lo cierto es que el Ministerio Público contaba con antecedentes para judicializar esta causa, por lo que no se le condenará en costas por existir motivos plausibles para litigar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 14 N° 1, 15 N° 1, 194, 195 y 196 del Código Penal, artículos 2, 4, 6, 7, 9 y 15 de la Ley N° 19.799 y artículos 1, 4, 47, 295, 296, 297, 336 inciso segundo 342, 344, 346 y 347 del Código Procesal Penal, **se declara:**

I.- Que **se absuelve** a **LUIS EDUARDO QUINTANA HORMAZÁBAL**, cédula de identidad N° 15.675.439-0, ya individualizado, de la imputación que lo consideró autor de un supuesto delito de uso malicioso de instrumento público, supuestamente acaecido en el territorio jurisdiccional del tribunal, el 8 de octubre de 2020.

II.- Que no se condena en costas al Ministerio Público por los motivos señalados en el considerando décimo tercero de esta sentencia.

Regístrese y remítanse en su oportunidad los antecedentes necesarios al Juzgado de Garantía de Arica. Hecho, archívese.

Redactada por la Juez Titular doña Fabiola Andrea Collao Contreras.

RIT N° 230-2021.

RUC: 2001031235-4

**PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
ARICA**

Pronunciada por los jueces de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, doña Ana Paula Sepúlveda Burgos, doña Fabiola Andrea Collao Contreras y don Oscar Antonio Huenchual Pizarro.